

La Desestabilización de Honduras: El Papel de las Instituciones Políticas

Joshua Bellingham

En años recientes la problemática de la emigración desde Honduras hacia los Estados Unidos se ha convertido en un tema de mucha politización y polémica. A pesar de que la emigración de Honduras no es un fenómeno nuevo, el asunto se llevó a otro nivel en 2014, cuando se registraron miles de menores de edad que había incurrido en el camino traicionero hacia la frontera estadounidense. La crisis anterior, permite observar el profundo peligro que corre en la sociedad hondureña. Desde el año 1998, muchos hondureños han emigrado para escapar del desastre físico y económico que el Huracán Mitch había infligido. Sin embargo, los motores de esta nueva emigración sobrepasan la dimensión económica (Carvajal, 2014) La expansión de las redes narcotraficantes, han quebrantado el pacto social, ahuyentando la inversión y el desarrollo, debido a la intensa extorsión (Archbold, 2014). Sin embargo, el debate estadounidense que entorno al auge migratorio desde Honduras, se ha fijado en la “seguridad fronteriza”, ignorando en su totalidad los factores no-económicos que impulsan la fuga de adultos y niños. En muchos casos la violencia motiva la migración de menores, por ejemplo tan solo en 2014, 2000 menores huyeron de la ciudad de San Pedro Sula (Park, 2014). El deseo de huir se trata de supervivencia no de preferencia. El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asegura que aunque muchos emigran por falta de oportunidades laborales, la raíz de esta escasez es el ambiente de violencia (O'Boyle, 2014). Se debe tomar en cuenta el conjunto de factores que contribuyen a la inestabilidad de la sociedad. Por esta razón, el argumento céntrico de este análisis se enfoca en los nexos políticos que influyen en la desestabilización de Honduras; y su llegada a ser un país en decadencia, repleta de crimen y corrupción. La propuesta teórica reconoce que el país ha sido arrancado de la seguridad por causa de factores visibles arraigados en el liderazgo de

presidentes, quienes aceptaron la desviación de Honduras como un destino incambiable.

Son varios los factores económicos, sociales y políticos que, durante las últimas décadas, han contribuido a la proliferación del ajunte de narcotráfico y el crimen organizado en el territorio nacional. Además, la presencia de maras como el MS y el M-18 ha hecho que muchos barrios y comunidades vivan bajo un duro control y la competición para dominio territorial. (UNODC, 2012). Además, desde los años 2000, las maras han demandado sin misericordia un 'Impuesto de Guerra' a los transportistas, empresarios y hasta los transeúntes. Estas fuerzas potentes han multiplicado los niveles de violencia y deteriorado la confianza pública en la seguridad. Sin embargo, el avance criminal y el quebranto social están arraigados en una profunda debilidad institucional del país; sugerido en la inhabilidad de las fuerzas de seguridad de desarrollar tácticas adecuadas para controlar los problemas de criminalidad que continúan evolucionando (Rivera, 2013).

Además, la economía estancada ha restringido el presupuesto policial y de investigación. Lo anterior ha provocado que la Policía ni siquiera tenga los elementos suficientes para combatir el menudeo de drogas en los barrios. Las Naciones Unidas aconsejan un promedio de 280 policías para cada 100,000 habitantes; el promedio internacional alcanza el 225; sin embargo Honduras solo logra 151 policías, sin contabilizar los corruptos (Sabet, 2010). También suelen carecer de transporte adecuado y de equipamiento investigativo. Por lo tanto, en muchos casos la policía ni siquiera puede movilizarse para responder a las denuncias. Faltando policía confiable, los hondureños han tenido que improvisar, y ahora muchos denuncian criminalidades en las estaciones de radio. Durante un programa reciente en la emisora HRN, un ciudadano del municipio de Choloma denunciaba la presencia de narcomenudeos vendiendo drogas a niños, pero la policía no tenía transporte disponible para arrestarlos. El presentador ayudaba al denunciador establecer comunicación con un amigo suyo que es jefe policial de Choloma (HRN, 2015). Este ejemplo evidencia una gran quiebra estructural, y una falta de capacidad de los líderes y gobernantes de mantener orden y justicia.

Ahora, Honduras sufre un ciclo de matanza constante; un vistazo a los periódicos demuestra la terrible realidad. La violencia es tan común, y los recursos tan escasos

que en cuatro años cada agente tendría que haber investigado 140 casos de asesinato. En medio de la violencia, hay una impunidad insoportable; desde el año 2010 hasta 2013 se registraron 27,272 homicidios, de ellos solo 1,009 obtuvieron la sentencia condenatoria. El 96% se quedan impunes. (El Herald, 2014) .

La raíz de la migración hondureña se encuentra, mayoritariamente, en la falta de la libertad democrática que ha ido desapareciendo desde que el narcotráfico y el crimen organizado empezaron a radicarse en el país. Como consecuencia la extorsión, el secuestro y el asesinato han sido normalizados en el país. Más que todo, esta desesperación democrática se entorna en los jóvenes, quienes enfrentan un pésimo sistema educativo y una violenta cultura callejera que no permite dedicarse a estudiar (Nazario, 2006). Alfredo Figueroa explica que el aumento de la narco cultura tras la presencia de pandilleros en las escuelas, tiene efectos muy dañinos en la vida cotidiana, “en el clima escolar y en las posibilidades de aprendizaje” (Figueroa, 2008) . El Teniente Coronel Santos Nolasco, explica que en Honduras las escuelas se han convertido en “un punto básico de organización de la pandilla”, porque ahí pasan todos los niños. De hecho, ni siquiera tienen que reclutar porque “hay más niños dispuestos a incorporarse a las pandillas que ellas puedan o quieran absorber”. El gran empujador hacia la cultura narco es el anhelo de seguridad y supervivencia en una economía débil con “salarios abismales”. Esta realidad se vio en 2010; más de 5,000 niños menores de quince años fueron arrestados vinculados a pandillas (Estreda, 2014). Por causa del trágico involucramiento criminal de los jóvenes, el daño más aplastante en las comunidades hondureñas ha sido la continuada normalización de la narcoviolencia que aterroriza la sociedad. Se estima que al menos 947 menores de 23 años fueron asesinados en el año 2014 por vínculos al narcotráfico; esta cifra revela un incremento de 21 casos desde el año 2013. De hecho, entre 1998-2014 ocurría un agravamiento pavoroso de la matanza de niños y jóvenes, aumentando de 49,3 asesinato mensuales a 83,9 (La Prensa, 2014). Ahora la Organización de las Naciones Unidas, aconseja que las autoridades estadounidenses etiqueten a los migrantes menores, provenientes de Honduras, como víctimas de conflicto armado para garantizarles refugio.(Lederman & Pace, 2014). La población hondureña queda atrapada la espada y la pared: si se quedan en Honduras los narcos les quitan la vida, pero si huyen hacia el norte pueden perder la vida horribilmente en las vías traicioneras de la “Bestia” (Figueroa, 2008). El desmoronamiento de la sociedad

hondureña ha emergido con vertiginosa rapidez, y la violencia internase ha convertido en una fuerza propulsora de la migración de menores.

La pobreza y el bajo desarrollo de las instituciones estatales han hecho que Honduras siempre sea vulnerable a la infiltración por el crimen organizado. Sin embargo, aunque el narco-crimen ha operado oculto desde las dictaduras, la comunidad académica tiene mucha duda sobre como el narcotráfico actual ha evolucionado hasta poder acabar con la seguridad de la población (Bunck & Fowler, 2012). Durante la mayor parte del siglo XX, Honduras era un país extremadamente pacífico; la tasa de homicidios tenía un promedio de 10 personas por cada 100 mil habitantes, comparado a 2012, donde la tasa era 80 por ciento mayor (Carvajal, 2014). Mientras que la criminalidad no alcanzaba niveles notables, durante los años sesenta y setenta el narcotráfico empezó a aparecer en rincones del Estado; como las Fuerzas Armadas que guardaban los aeropuertos. Pese a esto, en 1981 se suponía que el narcotráfico era tan minúsculo que los EEUU cerraron la oficina del Control de Drogas en Honduras (Rosenberg, 1988). Es probable que esta ausencia de crimen extensivo se debiera a la doctrina política de los Generales. El liderazgo militar fue marcado por el mantenimiento de la seguridad ciudadana, mientras que los países periféricos como El Salvador y Nicaragua sufrían conflictos internos (Rivera, 2013). Los militares solían apoyar al pueblo, por ejemplo, tras la transportación de campesinos al mercado para vender la cosecha. También promovían un sistema educativo estable y disciplinado sin drogas y delincuencia (Sanchez, 2014). Bajo las dictaduras, Honduras se distinguía de sus vecinos porque los gobernantes estaban dispuestos a negociar y lograr acuerdos entre los movimientos sociales. De hecho, durante los años setenta, el sindicato de campesinos hondureños logró una reforma agraria nunca antes vista en Centroamérica (Ruhl, 1984).

Durante esta etapa política, los gobernantes militares no toleraban el crimen. Sin embargo, esta dureza empezó a diluir en los años ochenta con los procesos de democratización y descentralización de las instituciones estatales (Rodríguez, 2014). Durante este proceso, el poder y la soberanía del Estado hondureño también fueron disminuidos por los acuerdos de alianza con EEUU en medio de las guerras revolucionarias. El reducido papel militar en las instituciones políticas dio paso a una nueva etapa de crimen organizado, fomentado por las profundas secuelas de violencia de las guerras civiles (Yougers, 2014). El debilitamiento nacional fue evidenciado con la entrada de narcotraficantes colombianos en 1986. En el mismo año, la extradición del traficante hondureño Ramón Matta a los EEUU solidificó la desconfianza pública en la capacidad estatal para resolver los problemas nacionales (Rivera, 2013). Al llegar el año 1988 ya había un temor social de que Honduras se había convertido en un puente narcotraficante. Sin embargo el derrumbamiento de la sociedad hondureña no paró, y en los años noventa se observa la normalización de “nueva” violencia, que amenaza a cualquiera, en cualquier lugar. Este terrorismo produjo la plaga de temor que existe actualmente en las plazas públicas (Torres-Rivas, 1993).

Un factor clave en esta desestabilización nacional es la agenda neo-liberal y el proceso de modernización económica, apresurado por los intereses de los EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La reforma neoliberal incluía extensa privatización de industrias públicas, la minimización de involucramiento estatal, y grandes recortes presupuestales. Por ejemplo, el poder de las Fuerzas Armadas fue disminuido en el gobierno de Roberto Reina, que rebajó el 10% del presupuesto militar, restringiendo la fuerza contra el crimen. También los militares perdieron control de HONDUTEL, la agencia pública de telecomunicaciones, que había ayudado financiar el ejército (Carvajal, 2014). Junto con la modernización estatal, se pretendía avanzar la democracia tras el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos. Sin embargo los aparentes avances resultaron contradictorias. En el año 1990 el Presidente Rafael Leonardo Callejas implementó el *Programa de Ajuste Estructural*, que desmontaba los servicios públicos como de salud y educación: y estableció una nueva estructura legal de mercado libre que otorga grandes exenciones tributarias a inversionistas extranjeras y a las familias elites (Rivera, 2013). Debido al libramiento económico, el PIB nacional cayó más bajo que en los años ochenta; porque la

competición global hizo que disminuyera el sector agrario (Barahona, 2005). El conjunto de la pobreza profundizada, las oportunidades disminuidas, y la concentración de riqueza ayudó a fomentar y ampliar la inestabilidad social y la desesperanza (Robinson, 2003). Muchos ahora reconocen que la política neoliberal forma una parte subyacente en el derribamiento estatal, con nexos a la proliferación de la violencia y la despenalización de delincuencia (Sánchez-Ancochea & Puig, 2013).

Durante la siguiente década, la violencia de los maras y los narcotraficantes se arraigaba en el territorio hondureño a niveles más altos que bajo el liderazgo militar (Carvajal, 2014). Además, las consecuencias estructurales de la política neoliberal se vieron en una serie de desastres políticos, económicos y sociales. En el año 1998 con el daño del Huracán Mitch infligió una retrasada de más de 30 años de desarrollo infraestructural. Lejos de maximizar la oportunidad de reconstruir el país, el gobierno de Carlos Flores malversó la ayuda internacional.

Los cimientos nacionales quedaron destrozados, y miles de hondureños fueron desplazados de su tierra (Urrea, 2013). Estos sucesos marcaron el primer periodo de la fuga hondureña hacia los EEUU. Según las cifras migratorias, en el año 2006, 61.4% de los Hondureños quienes vivían fuera del país, habían migrado entre los años 1998 y 2005 por causa del desmoronamiento económico (Endo, 2009). Después del huracán, el Gobierno necesitaba rehabilitar y reconstruir el país destrozado. Así que, una política de seguridad estricta, hubiera sido esencial para limitar el crimen y la emigración (Secretaría de Salud de Honduras, 1999).

Aunque el factor geográfico arriesga a Honduras, el papel de la voluntad política se mantiene primordial en la cuestión de la vulnerabilidad territorial. Se considera que, en los últimos diez años, un clima de irresponsabilidad e indiferencia entre los gobernantes, ha permitido la usurpación del pueblo por el crimen organizado, provocando la fuga de 87 por ciento de todos los hondureños que viven en los EEUU (Fonseca, 2011); Desde el año 2000, cuando había aproximadamente 217,000 hondureños en los EEUU, la migración aceleró a 702,000 en 2011 (Brown & Petten, 2013).

Es posible que este aumento migratorio corra exponencialmente con la criminalidad, la cual ha seguido desencadenado año tras año. En el año 1999 la membresía de las

maras alcanzó 36,000 (Carranza, 2006) Se necesitaba una estrategia seria para lidiar con la situación. En 2002, el Presidente Richard Maduro, del Partido Nacional, se empeñó a implementar una póliza de *Cero Tolerancia*, una *guerra contra el crimen*. Aumentó las fuerzas policiales, y en 2003 implementó una póliza de *Mano Dura* contra las maras; intensificado por la *Ley Antimaras* que prohibió las afiliaciones con pandillas. Los capturados recibían hasta nueve años de encarcelamiento y una multa de \$10,000. La *Mano Dura* pretendía establecer una autoridad renovada en las comunidades urbanas, a donde la policía militar fue mandado a liberarlos de los pandilleros (Rivera, 2013). Maduro se declaró resuelto a proteger el pueblo del crimen, aún más porque él había sufrido el secuestro y asesinato de su hijo. Esta dureza contra el crimen llevaba rasgos de la doctrina de las dictaduras anteriores. Al terminar su presidencia en 2005, la estrategia había disminuido la inseguridad callejera y bajado los niveles de homicidio aproximadamente 30%. El flujo de drogas en el territorio se mantuvo relativamente estable (Urra, 2013).

No obstante, la situación hondureña quedó extremadamente precaria. La paz perpetua se mantenía como un sueño alejado, que requeriría un esfuerzo a largo plazo que transcurriría durante varios liderazgos y gobiernos. Se dependería sumamente de la voluntad y el coraje de los encargados. De algunas maneras esta clase de liderazgo fue expresado tras la administración de Maduro. Por ejemplo el Presidente y el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, acompañaban a la policía en las operaciones contra las maras en los distritos pobres. También Maduro promovía la paz tras el *Programa de Comunidad Más Segura* que involucraba la ciudadanía en la represión de actividades ilegales (Zinecker, 2008). Pero a pesar de esta valentía política, al fin de su presidencia, fue evidente que estas iniciativas para erradicar las redes criminales solo representaban una pieza del rompecabezas; de hecho, la concentración de pandilleros encarcelados facilitó a los criminales organizarse más. La paz nacional y callejera dependería del próximo líder, y su voluntad para combatir el desorden con reformas del estado, como en la policía y el sistema penitenciario (Cawley, 2014).

Desafortunadamente, tras los siguientes años la gente vivió procesos dolorosos de aun mayor derrumbamiento social tras la apatía y egoísmo de los próximos presidentes (Zinecker, 2008). En 2006 se puso fin a la lucha reñido contra las amenazas violentas cuando el terrateniente Manuel Zelaya asumió a la presidencia.

Su administración rechazó la estrategia 'represiva' del pasado gobierno y la reemplazó con un disminuido interés en la contención de la criminalidad. El factor determinante fue la ideología del Ministro de Seguridad Álvaro Romero, quien enfatizaba que el nuevo gobierno no pretendía implementar ninguna dura ley contra las maras (Zinecker, 2008). En el primer año de la 'mano ligera' la violencia alzó instantemente, agravada por la presencia de los carteles quienes huían de la ofensiva militar en México (Rodríguez, 2014). No obstante, el destapo de violencia no preocupaba a Zelaya; de hecho se reunía pocas veces con sus aconsejadores militares y policiales. Pronto, Honduras se convirtió en la madriguera criminal de Centroamérica. Hasta el año 2005 el gobierno no había observado ningún vuelo ilícito aterrizar en Honduras. Pero con la entrada de Zelaya en 2006, los narcotraficantes venezolanos y colombianos empezaron a transportar cocaína directamente a Honduras. El fruto de esta política indiferente se evidenció dramáticamente en 2007 cuando las autoridades embargaron 100 toneladas de cocaína; mientras hace cinco años solo contabilizaron 20 toneladas, (UNODC, 2015). Además, la intensificación del ambiente criminal hizo que la tasa de homicidios aumentara entre el periodo de 2005-2009, de 37 a 66.8 por cada 100 mil habitantes (Egenhoff, 2011).

Al llegar el año 2009 la migración descomunal atestaba de la profunda secuela del esfuerzo desapasionado ante el dominio absoluto del crimen. De hecho, en ese año se contaba 63 inmigrantes hondureños en los EEUU Unidos por cada 1,000 ciudadanos en honduras, que sobrepasó la cifra guatemalteca de 57 migrantes (Cruz, 2010) Sin embargo la fuga de confianza socioeconómica aún no había arrancado por completo. Sobre todo, Zelaya perseguía una agenda populista; intentaba modificar las reglas constitucionales para mantener un poder semejante a Hugo Chavez (CVR, 2011). La agenda populista amenazaba el futuro democrático de honduras; y en junio la Corte Suprema comandó al General Vásquez Velásquez que expulsara el Presidente a Costa Rica. Paradójicamente, este 'Golpe de Estado' causó fuerte castigo internacional. El Gobierno de Obama suspendió la ayuda militar; además la ayuda monetaria del Banco Mundial y la Unión Europea fue congelada. Esta pérdida de inversión y exportación redujo el PIB a -2.1 (Urra, 2013). El Gobierno interino del Roberto Micheletti enfrentaba una situación desesperada; carecía de recursos y presupuesto en medio del caos social y económico. No había una estrategia contundente para combatir el crimen. Durante esta vulnerabilidad nacional las maras

transnacionales ganaron aún más control del país y de la gente. Al mismo tiempo el flujo de drogas expandía a niveles nunca previstas; solo en 2009 al menos 154 narco-vuelos aterrizaron en Honduras cada semana (Bosworth, 2010).

Se esperaba que la situación mejorara en 2010, cuando Porfirio Lobo asumió a la presidencia. En 2005, él había hecho campaña contra Zelaya, proponiendo medidas de seguridad más duras que Maduro. Sin embargo Lobo no tenía suficiente coraje político para fortalecer el estado quebrantado. En 2013 proponía duplicar el número de la policía nacional hasta 20,000 elementos. Pero sin poder implementar una reforma sistemática, la extendida corrupción policial impidió restablecer la confianza ciudadana. De hecho, la confianza fue destruida. La injusticia contra abogados, periodistas, y mujeres aumentaba; y entre 2005-2012 el número de femicidios aumento 246 por ciento (IUDPAS, 2013). También durante el gobierno de Lobo los profesionales de derecho combatían el narcotráfico; por causa de esto 53 abogados fueron asesinados entre 2010-2012 (CONADEH, 2012).

Según la Organización Mundial de la Salud, una “epidemia de homicidios” se registra cuando el índice por cada 100,000 habitantes alcanza 10. Honduras ya ha sobrepasado una situación de epidemia; en realidad encabeza la tasa de homicidios más alta del mundo (CONADEH, 2012). Este fracaso del liderazgo ha dejado que miles de niños, adultos, y familias se arriesgan en el viaje al norte, repleta de crimen. En 2014, un hondureño joven explicaba desanimadamente que “no quiero regresar”; ahora para los hondureños el empujón de mero supervivencia y el anhelo de paz sobrepasan el asunto económico (RTV, 2014).

Para concluir, esta investigación ha transcurrido una variedad de etapas políticas impactantes; las cuales han servido para llegar a un mayor entendimiento crítico de las fuerzas subyacentes que corren en el panorama hondureño. Sobre todo, se ha hecho evidente que la raíz de la inestabilidad nacional no se encuentra en poderes incontrolables, sino en una variedad de factores controlables, ubicados principalmente en la reforma institucional, la agenda política y el liderazgo. Por lo tanto, este análisis ha evidenciado una austera diferencia entre las metas políticas de los presidentes y gobiernos. Además, la relativa ausencia del crimen organizado durante las administraciones dictatoriales ha presentado un posible paralelo entre la dureza de la doctrina política y la seguridad nacional. De la misma manera, se observa

que la política ligera de Manuel Zelaya ante un país en peligro produjo efectos destrozadores en cuanto al narcotráfico y la violencia. También, la presidencia del pos-golpe reestablecía la carencia de voluntad valiente para implementar reforma transformativa ante un estado demorado. Por consecuente, es claro que la migración que ahora se vive ha nacido de un país tempestuoso con una política que niega enfocarse en la necesidad del pueblo.

Palabras sin referencias: 3300

References

- Archbold, R. (2 de August de 2014). *Hope dwindles for hondurans living in peril*. Obtenido de New York Times : <http://www.nytimes.com/2014/08/03/world/americas/hope-dwindles-for-hondurans-living-in-peril.html>
- Bosworth, J. (2010). Honduras: organized crime gaining aid plitical cisis. *Woodrow wilson international centre for scholars*, 1-30.
- Bunck , J. M., & Fowler, M. R. (2012). *Bribes, Bullets, and Intimidation: Drug Trafficking and the Law in Central America*. Pennslycanvia : Pen State Press.
- Carvajal, R. A. (2014). Violence in Honduras. *Naval Postgraduate School* .
- Cawley, M. (20 de January de 2014). *Extradition, maras and police: Ex Honduras minister looks at the future*. Obtenido de Insight crime : <http://www.insightcrime.org/news-analysis/extradition-maras-and-police-ex-honduras-minister-looks-at-the-future>
- CONADEH. (2012). *Informe anual del comisionado Nacional de los derechos humanos*. Tegucigalpa: CONADEH.
- Cruz, J. M. (2010). Government responses and the dark side of gang suppression in Central America. Maras. Gang Violence and Security in Central America.
- CVR. (2011). *Comisión de la Verdad y la Reconciliación*. Obtenido de http://www.oas.org/es/sap/docs/DSDME/2011/CVR/HondurasInformeCVRTOMO_II_2.pdf
- Egenhoff, T. M. (2011). Seguridad y crimen organizado transnacional . *Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones*, 2(1).

- El Herald. (24 de Noviembre de 2014). *Homicidios en Honduras impunes en un 96%*.
Obtenido de El Herald: <http://www.elheraldo.hn/pais/770820-214/homicidios-en-honduras-impunes-en-un-96>
- Endo, Hirsch, S., Jan, & Borowik, K. (2009). *The US-Honduras remittance corridor*.
Washington: World Bank.
- Estreda, S. (8 de Diciembre de 2014). *Pandillas hondureñas controlan hasta las escuelas*.
Obtenido de HRN la voz de honduras : <http://www.radiohrn.hn/l/noticias/pandillas-hondure%C3%B1as-controlan-hasta-las-escuelas>
- Figueroa, A. R. (2008). *Escuelas públicas en tiempos del narco*. Chile : UNESCO.
- Fonseca, M. A. (2011). *Tendencias Migratorias. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de Honduras*.
- HRN, R. (13 de Abril de 2015). *HRN la voz de honduras* . Obtenido de Departamentales:
<http://www.radiohrn.hn/l/departamentales>
- IUDPAS. (2013). *Boletín Especial sobre Criminalidad Policial en Tegucigalpa*: Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad-UNAH.
- La Prensa. (2014). *Casi mil jóvenes fueron asesinados este 2014 en Honduras*. Obtenido de La Prensa el diario de los nicaraguenses:
<http://www.laprensa.com.ni/2014/12/23/internacionales/1669228-casi-mil-jovenes-fueron-asesinados-este-2014-en-honduras>
- Lederman, J., & Pace, J. (24 de July de 2014). *U.S. Weighs Refugee Status For Honduran Youth Displaced By Armed Conflict*. Obtenido de Huffingtonpost:
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/24/border-crisis-honduras-refugees_n_5618599.html
- Nazario, S. (2006). *La Travesía de Enrique: La arriesgada odisea de un niño en busca de su madre*. Random House Trade Paperbacks.
- O'Boyle, M. (2014). *Honduras president blames U.S. drug policy for migrant surge - paper*.
Obtenido de Rueters : <http://uk.reuters.com/article/2014/07/14/uk-usa-immigration-honduras-idUKKBN0FJ20R20140714>
- Park, H. (October de 2014). *Children at the Border*. Obtenido de New York Times :
<http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/15/us/questions-about-the-border-kids.html>

- Rivera, L. G. (2013). *Territories of violence: State, marginal youth, and public security in Honduras*. New York: palgrave macmillian.
- Robinson, W. I. (2003). *Transnational conflicts: Central America, social change and globalization*. London: Verso.
- Rodríguez, C. G. (2014). *Panorama político hondureño: Crisis de gobernabilidad*. Instituto Español de Estudios estratégicos.
- Rosenberg, M. B. (1988). Narcos and politicians: The politics of drug trafficking in Honduras. *Journal of inter-american studies and world affairs*, 30(2), 143-165.
- RTV. (2014). *El 'sueño americano' de una familia hondureña que cruzó la frontera clandestinamente*. Obtenido de <http://www.rtve.es/noticias/honduras/>
- Ruhl, M. (1984). Agrarian structure and political stability in Honduras. *Journal of interamerican studies and world affairs*, 26(1), 33-68.
- Sabet, D. (2010). Police reform in Mexico advances and persists obstacles. En E. L. Olson, *Shared responsibility US-Mexico policy options for confronting organized crime* (pág. 248). Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute.
- Sanchez, O. (22 de March de 2014). Las experiencias de un hondureño humilde. (J. Bellingham, Entrevistador)
- Sánchez-Ancochea, D., & Puig, S. M. (Edits.). (2013). *Handbook of Central American Governance*. New York: Routledge.
- Secretaría de Salud de Honduras. (1999). *El Huracán Mitch en Honduras*. Organización Panamericana de la Salud.
- Torres-Rivas, E. (1993). *History and society in Central America*. Austin: University of Texas.
- UNODC. (2012). *Transnational organized crime in central america and the Caribbean: A threat assessment*. Obtenido de <http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html>
- UNODC. (2015). *Cocaine from South America to the United States*. Obtenido de <http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html>
- Urra, I. R. (2013). ¿Que pasa en honduras? *Revista divergencia*, 3(2), 133-156.
- Youngers, C. A. (2014). "El debate sobre políticas de drogas en América Latina.". *URVIO-Revista Latinoamericana de Estudios en Seguridad*, 13(15).

Zinecker, H. (2008). *Violence in a homeostatic system*. Frankfurt : Peace Research Institute

: